

CRISIS POLÍTICA, "OUTSIDERS" Y DEMOCRADURAS: EL "FUJIMORISMO"

Julio Cotler

1. Introducción

Las transiciones a la democracia que se realizaron en América Latina durante la década pasada propiciaron la vitalización de las organizaciones de la sociedad y renovaron el repertorio de las demandas al Estado. Sin embargo, los flamantes regímenes constitucionales no les dieron una respuesta satisfactoria, aduciendo las limitaciones impuestas por el legado de los gobiernos militares, por la crisis de la deuda externa y por la globalización económica.

Ello ha condicionado el desarrollo de antagonismos generalizados que erosionaron las estructuras sociales y sus bases institucionales. Además, en algunos países, la subversión, la violación de los derechos humanos y el narcotráfico agravaron la debilidad estatal y la fragmentación social, como en el caso peruano.

Estas circunstancias han motivado que surjan temores a nuevas regresiones autoritarias y que se multipliquen las dudas sobre la posibilidad que, en las nuevas condiciones internacionales, la democracia pueda ser fundamento de la cohesión social y el desarrollo. Así, sin solución de continuidad, se pasó del optimismo al escepticismo, sino al más craso pesimismo, sobre el futuro de América Latina (Weffort 1990).

2. Cambios de escenarios y de actores en América Latina

Las expectativas generadas por la transición a la democracia indujo a los contrapuestos actores sociales y políticos a extremar sus exigencias al Estado, en

circunstancias que la deuda externa y las transformaciones mundiales ponían en crisis el orden implantado bajo fórmulas nacionalistas y populistas (Cavarozzi 1991; Paramio 1992).

Estas contradicciones intensificaron el conflicto y desbordaron las mediaciones políticas. La debilidad o inexistencia de un sistema de partidos condicionó este desenlace y la clásica fragmentación política y social determinó que fueran desoídas y rechazadas las convocatorias para morigerar las demandas y concertar los diversos intereses. *Prima facie*, el problema de la gobernabilidad parecía deberse a la naturaleza institucional del régimen, en tanto no permitía procesar debidamente dichas contradicciones, lo que dio lugar a diversas propuestas de reforma política.

Sin embargo, las desbocadas pugnas políticas y sociales para acceder a los recursos estatales deslucieron dichas propuestas; en consecuencia, los distintos bandos se neutralizaron, se desgastaron y, finalmente, socavaron las frágiles bases institucionales. Así, enfrentados al “dilema del prisionero” las diferentes partes se condenaron unas a otras.

Las excepciones a este comportamiento fueron los países que contaban con un relativamente sólido aparato estatal, administrado autoritariamente. En México, el predominio del PRI posibilitó al gobierno controlar las tensiones sociales, mientras que en Chile la dictadura militar de Augusto Pinochet aplastó las protestas. Estas condiciones permitieron que sus gobiernos aplicaran tecnocrática y autoritariamente medidas para reorganizar la sociedad y acomodarla al nuevo contexto internacional. En Colombia, la guerra y el narcotráfico bloquearon y desviaron las expresiones antagónicas al cerrado pacto dominante.

A diferencia de estos casos, la impotencia de los regímenes democráticos para canalizar la disputa social y controlar la polarización política condicionó que se desbocaran en una ola inflacionaria, empobreciendo y “marginalizando” a las capas medias y populares, incorporadas al Estado que pugnaban por hacer valer sus recientes derechos de ciudadanía, especialmente los de la juventud. Esto dio libre curso al fenómeno de la “informalidad”: vastos sectores fueron abandonados, sino rechazados, por los gobiernos democráticos dando lugar a una reacción de incredulidad sobre las bondades de la democracia, de evasión y de objeción a la normatividad legal y al desplazamiento de dicha población hacia actividades extra y anti-estatales. De esta suerte, la región en su conjunto y cada uno de sus países adoptaron diferentes tonalidades de “intensidad” democrática. (O’Donnell 1993).

Los efectos devastadores de la llamada “década perdida” contribuyeron a resquebrajar las lealtades y expectativas asistenciales y redistributivas depositadas

en los partidos y en el Estado, hasta entonces factores calificados como organizadores de la economía y de la sociedad. De otro lado, la crisis del marxismo y la bancarrota del socialismo también colaboraron en desautorizar las identidades nacionalistas, populistas o revolucionarias, así como las certezas ideológicas centradas en el Estado.

En conjunto, motivaron el desarrollo de actitudes críticas y la relativa deserción a esos referentes políticos y culturales; en consecuencia se produjo una relativa “descolonización” de las organizaciones sociales y la desarticulación del entramado institucional y normativo que los partidos y el Estado habían erigido.

El desprestigio de las instituciones políticas en América Latina (ver cuadro 1 y 2) ha sido motivo para que se haga referencia a un divorcio de la sociedad con la política y el Estado; asimismo, la relativa disolución de los lazos de integración que la política y el Estado proveían han contribuido a crear una sensación de “crisis de valores” y de “anomia” social, particularmente en la juventud. Las expresiones más visibles de estas situaciones se observarían en la asimilación de valores y prácticas “insolidarios” y en el crecimiento de la delincuencia.

Cuadro N° 1
Satisfacción/confianza con el funcionamiento de la democracia.
Instituciones en América Latina y España*

Respuesta Positiva	BOL %	COL %	CR %	ECU %	GUA %	MEX %	PER %	UR %	VEN %	ESP %
Democracia	79	28	71	21	26	44	36	69	16	64
Sistema Electoral	36	27	64	28	48	33	52	73	25	63
Congreso	28	17	36	11	9	35	38	51	17	51
Policía	20	20	33	25	13	15	39	43	22	69
Justicia	21	26	39	16	15	22	21	53	22	41
Partidos Políticos	13	14	27	8	7	27	13	25	11	24

* Los países son: Bolivia (BOL), Colombia (COL), Costa Rica (CR), Ecuador (ECU), Guatemala (GUA), México (MEX), Perú (PE), Uruguay (UR), Venezuela (VEN), España (ESP).

Fuente: Centro Nacional de Consultoría (Colombia). Tercer barómetro iberoamericano, setiembre 1993.

Cuadro Nº 2
Confianza-Proximidad a los partidos políticos en
América Latina y España

Respuesta	BOL %	COL %	CR %	ECU %	GUA %	MEX %	PER %	UR %	VEN %	ESP %
Confianza en los partidos políticos	13	14	27	8	7	27	13	25	11	24
No tiene proximidad con ningún part. pol.	48	64	30	55	-	55	55	37	52	47

Fuente: Centro Nacional de Consultoría (Colombia), Tercer barómetro iberoamericano, setiembre 1993.

Estos factores han contribuido a dramáticos cambios en las izquierdas - marxistas o populistas- que, hasta hace poco, sellaban las orientaciones populares. En unos casos ha producido una dramática revisión teórica, que ha culminado con el desplazamiento de su interés por la revolución a la construcción de la sociedad civil y la democracia; en otros casos, a la elaboración de propuestas "comunitaristas" y, en algunos países andinos, a la formulación de utopías milenaristas.

Pero el fenómeno más destacado de estos cambios ha sido el generalizado proceso de despoltización y la eclosión de "gorreros", que utilizan indiscriminadamente los medios a su alcance y se aprovechan de los esfuerzos colectivos para su beneficio particular; estos fenómenos podrían guardar relación con la relativa "derechización" (ver cuadro 3) y rebrote de actitudes autoritarias.

Cuadro Nº 3
Posición política: izquierda* en
América Latina y España.

Respuesta	BOL %	COL %	CR %	ECU %	GUA %	MEX %	PER %	UR %	VEN %	EXP %
Escala de 1 a 10	5.5	5.6	6.7	4.9	0	6.6	5.5	5.5	6.6	4.9

* izquierda = 1; derecha = 10

Fuente: Centro Nacional de Consultoría (Colombia), Tercer barómetro iberoamericano, setiembre 1993

El "desencanto" con la política ha coincidido con la emergencia de nuevos actores sociales que persiguen satisfacer necesidades específicas y concretas. Estos embriones de sociedad civil, muchas veces auspiciadas por iglesias, organizaciones no-gubernamentales y por organismos internacionales, se asocian con ideologías comunitaristas fundadas en la auto-gestión del "pueblo".

Sin embargo, el incremento de la población en situación precaria y en condiciones de extrema pobreza, ha contribuido a mantener en vilo las expectativas distributivas de amplios contingentes sociales populares. De ahí la convivencia de estas nuevas formas de articulación con esporádicas y, a veces, violentas exigencias al Estado.

El resultado de la conjunción de estas transformaciones políticas y culturales ha sido el surgimiento de "*outsiders*", representantes de estos nuevos actores y valores anti-políticos. Los "*outsiders*" son ajenos y contrarios a la "clase política"; o, en su defecto, persiguen desembarazarse de los compromisos políticos contraídos. Collor y Fujimori; Victor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Carlos Menem y Carlos A. Pérez son casos ejemplares de estas nuevas situaciones.

Estos "nuevos caudillos" (Perelli, 1992) recuerdan los tradicionales liderazgos populistas porque denuncian los vicios e injusticias del sistema institucional y prometen resolver, personalmente, los agravios y las aspiraciones de las frustradas y desamparadas masas, concitando su respaldo. En las condiciones de relativa desarticulación institucional, las encuestas de opinión y los medios de comunicación recogen y difunden estos sentimientos, constituyendo las bases de legitimación para "el retorno del líder" de las "democracias delegativas", mediante fórmulas y relaciones plebiscitarias (O'Donnell, 1992; Zermeno, 1989; Cotler, 1993).

Pero, si el estilo de comportamiento y las relaciones de los "*outsiders*" con las masas se emparentan con aquellos liderazgos populistas, responden a los enunciados de las fuerzas neo-conservadoras que han emergido en América Latina, siguiendo la ola mundial (Chalmers, 1992). Su rechazo a la clase política y, en general, a la institucionalidad - que denominan laxamente de "populista" - se basa en su naturaleza anacrónica con las nuevas realidades nacionales e internacionales, motivo de su ineficacia y desprestigio. El carácter clientelista y prebendario de los partidos y del Estado sería fundamento del desmanejo gubernamental y la corrupción, del atraso y de la injusticia social. A su vez, la colonización de la sociedad por dichas instancias políticas habría generado prácticas "rentistas" al servicio de intereses particulares, que bloquean el desarrollo de las iniciativas individuales y del mercado.

Contra el populismo, que se constituye en símbolo emblemático de lo "tradicional", el recetario neo-liberal se define por su pragmatismo y eficacia. La drástica reducción de las funciones estatales, paralelamente al fomento del mercado, el fortalecimiento de la sociedad civil y el decisionismo tecnocrático se constituyen en los elementos correctivos de los vicios producidos por los partidos y el Estado.

Por esto, el ajuste, la estabilización y la liberalización económica serían los únicos instrumentos válidos, aunque temporalmente dolorosos, para eliminar los rasgos pre-capitalistas y pre-modernos de la sociedad y la cultura; y para sentar las bases del capitalismo y el liberalismo político en el marco del mercado internacional, espejo de la “modernidad”.

Las desastrosas consecuencias de los populismos y de los socialismos, contrastados con los exitosos resultados de estas medidas en Chile y México son presentados como pruebas del aserto neo-conservador; más aún, que se busque identificar el desmanejo económico con la democracia y el crecimiento capitalista con el autoritarismo tecnocrático. De ahí la simpatía de los neo-liberales hacia la experiencia chilena y que Pinochet sea su símbolo y ejemplo a seguir.

El amplio respaldo internacional a la aplicación del recetario neo-liberal y la carencia de alternativas válidas han favorecido que ese dilema entre democracia y autoritarismo se arraigue en diferentes sectores sociales; y que apoyen la restricción a la democracia - aunque temporalmente- a fin de que los “outsiders” puedan realizar las transformaciones económico-sociales como medio para lograr en un futuro, orden, bienestar y estabilidad. Es decir, se aceptaría una suerte de “necesidad histórica” de un primer tiempo “político”, marcado por la restricción a la participación democrática, para dar paso a un segundo tiempo “económico-social”.

Sin embargo, los conocidos estragos que produce la aplicación del repertorio de las medidas neo-liberales derivan en protestas y avivan las demandas distributivas entre las masas populares y sectores medios. Ello ha permitido que sus tradicionales representaciones, aunque venidas a menos, persistan en denunciar dichas medidas por su contenido anti-nacional y anti-popular. Pero, y como no podría ser de otra manera, las modificaciones anotadas propician el desarrollo de posiciones pluralistas y “social-demócratas” (Castañeda, 1993; Vellinga, 1993).

A fin de controlar el repunte de actores populistas o social-demócratas y las demandas de los empresarios que produce la “fatiga” del ajuste, los “outsiders” echan mano de procedimientos y dispositivos legales, para cerrarles el paso. La relativa aceptación y respaldo social a la concentración de atribuciones legislativas en el Ejecutivo, su acentuada capacidad de intervenir en el poder judicial y la facultad de reelección presidencial configuran algunos de los rasgos más visibles de las dictablandas o las democraduras de Argentina y Perú; mientras en Chile, la participación política de las fuerzas armadas garantiza que la “democracia dirigida” no permita a dichos actores tener una presencia decisiva.

Este peculiar desenlace se explica por el desprestigio y rechazo de la sociedad a las dictaduras militares; al desgaste de los actores populares y a la relativa legitimidad social de las consignas y de las representaciones neo-conservadoras; y, por último, a la nueva postura de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos, en relación a la defensa simultánea de los derechos humanos, la democracia constitucional y el mercado libre como se hizo patente en Haití, Perú, Guatemala, Venezuela.

Por esto, como aludimos al inicio, existen dudas sobre las posibilidades que las transformaciones económicas y sociales puedan realizarse democráticamente. El carácter tecnocrático y autoritario, complementado con la carencia de medios de fiscalización ciudadana a estos gobiernos sustentan dichas dudas. No es de sorprender que las nuevas plataformas reivindicativas apunten a la democratización de las dictablandas o democraduras.

3. Crisis política en el Perú

En 1980, la transición a la democracia en el Perú, como en otros casos, concitó las esperanzas de las mayorías populares y de los sectores medios de ver realizados sus seculares reclamos ciudadanos. Diez años más tarde, no quedaba sino desengaño y desesperación; el tradicionalmente débil Estado se encontraba en bancarrota; los partidos estaban desacreditados y arrastraban consigo a las organizaciones de la sociedad.

La subversión, el narco-tráfico, la creciente intervención militar en los asuntos públicos, la violación de los derechos humanos y, por si faltara algún otro flagelo, la hiper-inflación se concentraron para que la desintegración política y social fuera considerada como una seria posibilidad.

Las tradicionales y profundas jerarquías y desigualdades sociales -con sus connotaciones étnicas, raciales y regionales- fueron duramente cuestionadas políticamente a fines de los años cincuenta; la culminación de este proceso fue la crisis del régimen oligárquico-colonial y la constitución del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en 1968. Este emitió una serie de reformas para nacionalizar y democratizar, por la vía autoritaria, las estructuras sociales e institucionales destinadas a consolidar la integración nacional; y, gracias al crédito externo abultó las funciones productivas y distributivas del Estado, a fin de legitimarlo y fortalecerlo.

Pero, al bloquear la participación política el gobierno militar procuró la irrupción de las fuerzas que había contribuido a crear y movilizar con sus reformas

y discursos de corte populista y nacionalista. Desde 1975, el agotamiento de las posibilidades redistributivas del gobierno y la crisis fiscal contribuyeron a que las radicalizadas presiones sociales, las exigencias de los organismos internacionales de crédito y los apremios de la administración Carter forzaran la transición democrática, hecho que se concretó en 1980.

Los “jefes”, que regían de manera cuasi patrimonial sus organizaciones políticas, retomaron la representación parcelada de segmentos sociales ciñéndose a contrastadas ideologías. Las emergentes izquierdas marxistas y maoístas reprodujeron esos rasgos y mantuvieron una permanente competencia por el control del “movimiento popular”, radicalizando sus demandas “hasta sus últimas consecuencias”. En consecuencia, la tradicional fragmentación política se renovó y se reforzaron las varias y profundas divisiones que históricamente han marcado a la sociedad peruana (Cotler, 1993).

Con la muerte de Víctor Haya de la Torre, jefe máximo del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), este partido se dividió, favoreciendo la candidatura del jefe-fundador de Acción Popular (AP), Fernando Belaunde. Su apelación al consenso y la promesa de aplicar una política económica de corte expansivo le aseguraron el triunfo electoral. Sus afinidades con el conservador Partido Popular Cristiano (PPC), hizo posible su alianza y que Belaunde pudiera controlar la mayoría parlamentaria, dando pie para confiar que la estabilidad política resolvería los problemas relativos a la integración nacional, que el gobierno militar había dejado pendientes. Sin embargo, muy pronto, las decisiones gubernamentales y las reacciones sociales levantaron dudas al respecto.

El desmantelamiento de algunas reformas decretadas por los militares y las tibias medidas liberales que Belaunde aplicó merecieron reacciones contrarias en la sociedad y fueron calificadas como una “traición” a su plataforma electoral. La naturaleza tecnocrática de estas decisiones motivaron que la despechada oposición, constituida por el APRA y la Izquierda Unida (IU), así como los ignorados dirigentes gremiales, aprovecharan cualquier oportunidad para descalificar al gobierno. Mientras, las aisladas convocatorias para la “concertación” social serían desestimadas por la oposición y el gobierno.

Durante los dos primeros años de su gobierno, el control personal que tenía el presidente sobre la mayoría de los congresistas le permitió, mal que bien, torear las críticas sociales y las acusaciones de violación de los derechos humanos en la lucha que los militares llevaban contra la subversión iniciada en 1980. Pero, este irresponsable comportamiento contribuyó a que arriera la desconfianza al gobierno y que la concepción “formal” de la democracia cobrara fuerza.

A partir de la declaratoria de la crisis de la deuda externa en 1982, el gobierno se vio paralizado: los préstamos internacionales que aceptaban el fisco, permitiendo la distribución de prebendas y de medidas asistencialistas, se agotaron; mientras que se intensificaban las exigencias de los organismos internacionales para que el Perú ajustara su economía a fin de estar en condiciones de pagar la enorme deuda contraída desde el gobierno militar. De ahí que, si bien durante los dos primeros años del gobierno de Belaunde, el crecimiento del PBI fue de 2%, en 1982 decreció en la misma proporción y al año siguiente cayó en 15% sin poderse recuperar en los dos años restantes (Perú, INEI, 1992-1993).

La eclosión del sub-empleo urbano de una población migrante, con altas expectativas y una experiencia política radical, contribuyó a la proliferación de actividades extra-legales, "informales" que aceleraron los cambios del paisaje social, los usos y costumbres urbanos, sin que el gobierno pudiera controlarlas.

Este fenómeno social fue estudiado por Hernando de Soto (1984) y por José Matos (1984), y sus publicaciones tuvieron una amplia difusión y aceptación. Ambos caracterizaron este fenómeno como una muestra evidente de la resistencia y el rechazo de amplios sectores populares a las múltiples e irresponsables restricciones estatales que coartaban las iniciativas individuales y grupales. La conclusión era obvia: desregular la vida social a fin de fortalecer iniciativas personales que, para de Soto, produciría el fortalecimiento del mercado. Pero aún era temprano para que las simientes liberales florecieran; antes, el Estado debería derrumbarse y ser percibido, de manera inequívoca, como incapaz de responder a las necesidades sociales.

Pero, paralelamente, el abandono estatal a las demandas sociales incidió para que emergieran diversos movimientos sociales urbanos que, conjuntamente, con los trabajadores organizados exigieron la intervención gubernamental para resolver sus necesidades insatisfechas.

La historia se repetía: la inexistencia de acuerdos inter-partidarios y, al contrario, la clásica polarización y fragmentación política y social favorecieron, bajo las nuevas condiciones internacionales, que se intensificaran los movimientos pendulares de la economía (González de Olarte y Samamé, 1991).

Mientras tanto, desde 1980, la subversión maoísta y las acciones contra-subversivas de la fuerza armada determinaron un creciente número de muertes, destrucción de instalaciones y violaciones de los derechos humanos; aunque estas últimas quedaron impunes, impulsaron la constitución de organizaciones dedicadas a denunciarlas y que, con el tiempo, han cobrado una importancia decisiva. El

crecimiento de la producción y el tráfico ilícito de drogas -que ha hecho que el Perú participe con el 60% de la coca a nivel mundial- sirvió para atenuar la pobreza extrema de decenas de millares de familias campesinas, pero contribuyó a distorsionar la economía al generar el equivalente del 15% de las exportaciones legales. Además, por los cuantiosos recursos que origina ese comercio, los movimientos subversivos, las fuerzas armadas y policiales, y la administración pública se involucraron en este lucrativo negocio, socavando las frágiles bases institucionales.

La confluencia de todos esos fenómenos contribuyeron a dar un vuelco en el estado de ánimo de la sociedad que se reflejó en los resultados electorales. Las izquierdas legales, aparentemente unidas, lograron importantes éxitos electorales en 1983, que llevaron a que su candidato presidiera la Municipalidad de Lima; y que Alan García, dirigente del APRA que se había despuntado como líder de la oposición, ganara las elecciones presidenciales de 1985.

Si en 1980 Belaúnde obtuvo una confortable mayoría (45%), el candidato de su partido obtuvo en 1985 sólo el 7%; mientras que el APRA, que entonces había obtenido 27%, ahora, con García, conquistaba el 53%. Por último, mientras que la suma de los votos de AP y del PPC alcanzaban el 20%, los votos del APRA y de IU comprendían las tres cuartas partes del electorado.

Es así como, a mediados de la década pasada, el país se desenvolvía en diferentes escenarios y con diversos actores legales e ilegales, divididos y enfrentados, dando claros indicios de la dispersión política. Por esto la sucesión constitucional, después de 40 años, marcó un hito histórico. El sorprendente triunfo de García y del APRA, que durante 55 años había sido impedido de alcanzar el poder, prometía llevar a cabo, democráticamente, las transformaciones destinadas a resolver los viejos y nuevos problemas, y avanzar en la construcción nacional-estatal. Lo atestiguaba el entusiasmo juvenil de García para ser un “presidente de todos los peruanos” y llevar adelante su programa “democrático, nacional y popular”.

De entrada, García se enfrentó a los organismos internacionales de crédito, al decidir unilateralmente destinar sólo el equivalente del 10% del valor de las exportaciones al pago de la deuda externa, cuando ésta era similar al 362% (French Davis-Devlin, 1993). Esta decisión, que competía con la propuesta por Fidel Castro, le concedió notoriedad que García la proyectó a su política internacional “tercermundista” y no-alineada.

En lo interno, reprodujo las estrategias “heterodoxas” en boga en Argentina y Brasil, con resultados espectaculares: después de diez años de crisis y recesión

económica, el crecimiento del PBI por habitante en 1986 y 1987 fue de 7% y de 6% respectivamente. Mientras en los dos últimos años del gobierno de Belaunde los sueldos se redujeron anualmente en 8% y los salarios en 15%, en el primer año del gobierno de García subieron en 22.1% y 30.3% respectivamente. Además, por primera vez, el gobierno estableció una política de atención al “trapecio andino”, donde se concentra la población indígena y la pobreza extrema.

De otro lado, García adoptó una conducta tolerante con los tradicionales enemigos del APRA, de la derecha y de la izquierda; y asumió una enérgica posición contra la violación de los derechos humanos que se evidenció en el retiro de los comandos militares involucrados.

Estos comportamientos hicieron que el presidente ganara una adhesión insólita -que según las encuestas alcanzaba el 94% de la población- que le permitió gozar de una “luna de miel” política y social, sólo empañada por el rechazo de los subversivos a su oferta de pacificación.

Los espectaculares éxitos personales de García le otorgaron la capacidad de concentrar las decisiones gubernamentales, que sus allegados personales colocados en los puestos claves de las diferentes esferas estatales se encargaban de cumplir. Su incesante crítica a la administración pública, por “centralista”, “burocrática” e ineficiente, socavó su precaria estima y legitimidad, a la par que García justificaba su protagonismo en los asuntos públicos.

Pero, no por ello García abandonó las tradicionales prácticas patrimoniales permitidas por el régimen presidencialista. Su estratégico papel como dispensador de subsidios y exenciones tributarias, y la duplicación del número de empleos públicos, mayormente entre los apristas, se constituyeron en auténticas prebendas y sinecuras que el jefe distribuía graciosamente.

En su calidad de secretario general del APRA, siguió los mismos derroteros que en el gobierno, lo que propició que el partido se convirtiera en una extensión del gobierno y, en esa medida, de su voluntad. De ahí que desdeñara las sugerencias de los dirigentes del partido, quienes no tendrían otra alternativa que murmurar y seguir disciplinadamente sus órdenes.

Como resultado, García no tomó en cuenta las voces disidentes, o fueron acalladas por su inflamada verbosidad, por los “carpetazos” de la mayoría parlamentaria, por los jueces que nombró y por los militares que ascendió. Es decir, García reprodujo de manera exagerada el estilo patrimonial de Belaunde, gobernando sin control ni responsabilidad. Pero, a su vez, el enquistamiento del gobierno y la

auto-suficiencia de García favorecieron que se alzaran críticas y sospechas de corrupción, que rebrotaran las animadversiones al APRA y se incubaran divisiones en el partido.

La cerrada convicción en las bondades de su modelo económico llevó a que García descartara las diversas advertencias sobre los peligros que acechaba a la heterodoxia económica; que rechazara la realización de ajustes internos y, con mayor razón, a la formalización de acuerdos con los organismos internacionales de crédito. Por esta última razón, declararon “ineligible” al Perú y la práctica expulsión del país de la “comunidad internacional”. Pero, igualmente, García desoyó las exigencias de sectores radicalizados de las izquierdas para que rompiera con la “conciliación de clases” populista y enrumbara el país al socialismo. La autonomía de García acabó aislándolo.

A pesar de la alianza que estableció con los “doce apóstoles” del empresariado peruano, el visible agotamiento del modelo heterodoxo y la reacción internacional dieron lugar a que los capitales fugaran al exterior. Mientras que, en el otro lado del espectro social, los trabajadores y las capas medias, alentadas por las promesas de García, planteaban demandas exorbitantes y desarrollaban radicales movilizaciones.

Por último, en el curso de la reunión de la Internacional Socialista, en junio de 1986, la rebelión de los presos de Sendero Luminoso culminó con el asesinato de cerca de 300 internos, lo que deslució los afanes de García por ganar notoriedad mundial y levantó una ola de protestas.

A fines de 1986, la luna de miel de García había terminado. Pero, en vez de buscar fórmulas negociadas que establecieran las bases de un “consenso nacional”, fundamento de su propuesta “democrática, nacional y popular”, García realizó una “*fuite en avant*” que hizo trastabillar el precario orden político y social. Para suplir el perdido consenso pasivo, en julio de 1987 tomó la decisión personal de estatizar el sistema financiero, rompiendo lanzas con los grupos económicos y sin contar con el organizado respaldo político del APRA y de IU.

El terremoto político que inició esta disposición agudizó la clásica fragmentación política y dio indicios evidentes de arrastrar al país a profundas divisiones y transformaciones que, en las condiciones en que se desarrollaba la subversión hicieron temer por el futuro del país (Crabtree 1992, Graham 1992).

Por primera vez, los sectores capitalistas entraron abierta y directamente en la política al propiciar la movilización de la sociedad en contra de dicho decreto y paralizando la actividad económica. Pero sólo cuando Mario Vargas Llosa y

Hernando de Soto asumieron el liderazgo dicha movilización adquirió un cariz orgánico. Ellos no se contentaron con rechazar la estatización del sistema financiero por el peligro totalitario que suponía, sino que avanzaron atacando de manera vehemente y coherente el entero ordenamiento político "tradicional" y postularon una plataforma neo-liberal destinada a rediseñar total y completamente el país para "reinsertar" el Perú en la economía mundial. Las simpatías y los respaldos de un arco social muy variado se concretaron en la formación del "independiente" Movimiento Libertad que, para las elecciones de 1990, se asoció con AP y PPC en el Frente Democrático (FREDEMO) para candidatear a Vargas Llosa.

La iniciativa presidencial fue detenida por los tribunales y, a fin de aplacar los ánimos, la mayoría aprista del Senado redujo su alcance dejando ver las divisiones que se habían incubado en el APRA; mientras, las izquierdas entraban en un proceso de descomposición. Los conflictos personales entre sus líderes, las diferentes posiciones ante las medidas de García y frente a la subversión, sumadas a los rápidos cambios en los países socialistas confluyeron para que las izquierdas perdieran la brújula y que la IU se desintegrara en 1989.

García respondió a la movilización liberal convocando a las masas. Sin embargo, no pudo organizar su respaldo debido a las mencionadas divisiones en el APRA; también, porque los inmediatos efectos económicos del enfrentamiento político promovieron cada vez más altas y radicalizadas demandas que García, al tratar de satisfacerlas alentó la inflación.

En 1986 ésta se había reducido a 63%, pero al siguiente año trepó a 115%; y en 1988, cuando el conflicto político estaba declarado, se disparó a 1723%, y prosiguió en 2.775% hasta alcanzar 7.650% en 1990, el último año del gobierno de García. Por lo tanto, la caída en la producción, el empleo y los ingresos fueron dramáticos y significativamente superiores a los que experimentó América Latina. De ahí que, la "década perdida" fuera para el Perú una experiencia singularmente desastrosa (CEPAL, 1992; Comercio Exterior, 1993; Ministerio de Trabajo 1989-1990; Cuanto S.A., 1992)¹.

1 Entre 1985-1990, correspondiente al gobierno de García, el crecimiento del PBI de América Latina fue 11.8 y el incremento del PBI por persona de -0.5. En el Perú, fue -7.1 y -18.4 respectivamente. En 1989, sólo el 21% de la PEA se encontraba adecuadamente empleada en Lima y se redujo en dos puntos al año siguiente, por lo que el 49% de la población de la ciudad se encontraba por debajo de la línea de pobreza. De otro lado, entre 1981-1992 el crecimiento del PBI en la región fue 18.8% y el incremento por persona de -7.3; mientras en el Perú, han sido -11.4 y -31.8%. (CEPAL, 1992; Comercio Exterior, 1993; Perú, Ministerio de Trabajo 1989-1991; CUANTO S.A., 1992).

Después del desengaño con AP y PPC que explicara el bandazo electoral de 1985, una parte considerable de la población también rechazó al APRA y a la IU. Esto condicionó, de un lado, que se desdibujaran las identidades político-sociales, particularmente las que el APRA y las izquierdas habían contribuido a forjar en las clases populares y medias desde los años 30; y, de otro lado, que crecieran las simpatías de los jóvenes hacia los movimientos subversivos (Ferrando, 1992).

Estos hechos hicieron que las organizaciones sociales, políticamente colonizadas, perdieran su capacidad de convocatoria y aglutinamiento contribuyendo a la relativa desarticulación de los lazos de integración que habían sustentado, en condiciones que la precaria autoridad estatal se difuminaba (Grompone, 1991). Paradójicamente, García se adelantó a los neo-liberales y preparó sus cometidos de reducir el Estado².

El rechazo a los "políticos" se mostró en las elecciones municipales de 1989 cuando el grueso de los votantes se inclinó por los "independientes", anticipando lo que parecía ser el seguro triunfo de Vargas Llosa; mientras tanto, las encuestas a las que el presidente García era adicto, indicaban que contaba con la adhesión de sólo el 15% de los entrevistados, proporción que el último año de su gobierno cayó al 7%.

Sin embargo, la asociación de Vargas Llosa con los desprestigiados partidos y jefes de AP y del PPC, lo calificó como un "insider" (Vargas Llosa, 1993); asimismo, el sustento económico de los capitalistas, evidenciado en su millonaria campaña publicitaria, favoreció que el imaginario popular lo identificara con los "peces gordos" que, como lo había escrito en una de sus novelas, son percibidos como los agentes de la dominación.

Estas percepciones se vieron reforzadas por las reiteradas manifestaciones de soberbia de Vargas Llosa, al rechazar toda posibilidad de negociación con sus adversarios y al proclamar sus extremados propósitos de arrasar con el decaído ordenamiento institucional y dejar desamparada a la pauperizada población.

La falta de otra alternativa que las desprestigiadas candidaturas del APRA y de las divididas izquierdas condicionó que nuevas representaciones sociales abrieran paso a una corriente de opinión que respondía a la convocatoria del Ingeniero Alberto Fujimori, éste sí un auténtico "outsider". A esta calidad, se sumaba su posición consensual, su oposición a la ortodoxia liberal y su estilo personal de tratar

2 En 1990, como proporción del PBI los ingresos tributarios fueron 6.5%, el déficit público de 4.5% y el gasto social de 2.4% (Perú, Banco Central de Reserva, 1992; INEI 1992).

con el común de la gente. Por último, también la activa participación de García ayudó en ese sentido, a fin de bloquear a su enemigo personal, Vargas Llosa, y al candidato aprista que desafiaba sus intenciones de seguir dirigiendo los destinos del APRA.

Los resultados electorales dieron cuenta de los realineamientos políticos y sociales que se habían advertido en las elecciones municipales. Mientras en 1980 y 1985, los partidos recogieron el 97% de los votos, en 1990 se redujeron en más de un tercio, diferencia que se trasladó a Cambio 90, la agrupación de Fujimori.

En la segunda vuelta, para dirimir cuál de los dos candidatos más votados obtenía más del 50% de los votos requeridos para ser proclamado presidente, los izquierdistas y los apristas votaron contra Vargas Llosa, decidiendo la elección de Fujimori. Los resultados electorales mostraron el carácter socialmente segmentado de la contienda y los claros apoyos populares del ganador (Rospigliosi 1991). Pero rápidamente, Fujimori se deshizo de los compromisos contraídos con sus electores y se alineó con sus contrincantes. Los peruanos aprenderían que, como en el juego de naipes, “nadie sabe para quien trabaja” cuando se trata de un “outsider”.

4. El fujimorismo.

A raíz del inusitado triunfo electoral en 1990 y el golpe de estado que decretó en abril de 1992, Fujimori se ha convertido en símbolo del “outsider” exitoso. En la región, los Presidentes Paz Zamora de Bolivia y Rodrigo Borja de Ecuador, enfrentados a sus respectivas legislaturas, amenazaron seguir los pasos de Fujimori y disolver el Congreso. En Guatemala, el Presidente Serrano fracasó en su intento de asumir poderes totales debido a la rápida reacción de la nueva administración norteamericana. En Venezuela, la crisis de los partidos y el enfrentamiento entre los poderes han creado fuertes simpatías a los procedimientos fujimoristas. En Brasil, diversos políticos y militares han insinuado la posibilidad de soluciones análogas, mientras que el Presidente Itamar Franco, sus ministros e incluso miembros de las fuerzas armadas se han declarado explícitamente contrarios al “fujimorismo”.

Más allá de la región, Ross Perot y Boris Yeltsin han sido asociados con este fenómeno, motivando que Fujimori no tuviera empacho en declarar que “tengo derecho al copyright” (sic) ante las decisiones del ejecutivo ruso de clausurar el Parlamento. La crítica situación de los partidos en Italia y la emergencia de “outsiders” anti-democráticos en éste y en otros países europeos, igualmente han merecido que se haga referencia al presidente peruano.

Es decir, el fujimorismo parece constituir un caso particularmente ejemplar de la emergencia del "outsider" y la constitución de una demócradura. Por esto, su análisis puede servir de comparación con fenómenos similares.

El grave deterioro del país dejó ver con claridad los graves y abigarrados problemas que amenazaban al régimen político y al Estado, así como los estrechos márgenes de movimiento que tenía el gobierno para resolverlos. Al iniciarse el tercer período constitucional, que según criterios convencionales sería indicio de la consolidación democrática, la precaria autoridad estatal se encontraba duramente cuestionada; los fragmentados partidos habían perdido representatividad y la sociedad se desarrollaba por fuera y en contra de ambos. En una palabra, la "gobernabilidad" del país estaba en juego.

Por esto, la restauración del poder estatal se constituyó en el objetivo prioritario de sectores estratégicos, que asumieron la razón de Estado como fuente de justificación. Por sus orígenes étnicos, que lo aislaban de la élite social, por su naturaleza de "outsider" político y por los rasgos de su personalidad, Fujimori adoptó a cabalidad dicho objetivo, para lo cual todo era válido (Jochamovitz, 1993).

Al conocerse los resultados de la elección de 1990, algunos de los dirigentes de los partidos del FREDEMO y de la jerarquía militar reaccionaron contra el advenedizo ganador de la contienda; el origen de Fujimori y la supuesta relación con García fueron motivos para impugnarlo. La Iglesia Católica, que había apoyado abiertamente la elección del escritor, también reaccionó en contra de Fujimori por su relación con los evangelistas, puesta en evidencia con la designación de un representante de esa confesión para la segunda vice- presidencia. Por último, la inexistencia de un grupo mayoritario que lo respaldara en el dividido Congreso refrendaba el aislamiento político de Fujimori, lo que anticipaba una situación de aún mayor inestabilidad.

Pero, cual experimentado político, el presidente electo tomó la iniciativa y revertió esta situación de aislamiento al asumir "pragmáticamente" las perspectivas y los intereses de los militares, los empresarios y los tecnócratas, lo que le permitió establecerse como eje de una triple alianza política, a la que se sumaron los medios de comunicación. Sobre esta base Fujimori desarrolló una coherente estrategia destinada a "salvar el Estado" y la razón de Estado le otorgó la justificación para romper la legalidad constitucional.

Como luego se comprobaría, asumió secretamente los propósitos y las estrategias elaboradas por el servicio de inteligencia del ejército; encomió la labor de las fuerzas

armadas en su lucha contra-subversiva y rechazó las denuncias pendientes por violación de los derechos humanos y colusión con el narco-tráfico. Más aún, reiteró la acusación de Belaunde de que las organizaciones de defensa de los derechos humanos estaban vinculadas a los movimientos subversivos; estas irresponsables acusaciones generaron indignadas protestas, pero también el respaldo de sectores sociales dispuestos a apoyar esa lucha a rajatabla, en circunstancias que el terrorismo atacaba a los sectores medios urbanos y Sendero Luminoso se aprestaba a alcanzar el "equilibrio estratégico".

En segundo lugar, gracias a la colaboración de H. de Soto, Fujimori se relacionó y aceptó las indicaciones de gobiernos influyentes y de organismos multinacionales; y, gracias a los poderes que le otorgó el Congreso, adoptó las clásicas medidas de ajuste y de estabilización que llevaron a cabo técnicos afiliados a diferentes partidos, incluidos los de las izquierdas moderadas. Estas decisiones dieron inicio a un largo proceso, que parece no tener cuando acabar, de paulatina reducción de la inflación y de sostenida recesión económica.

Esta sorpresiva decisión acarreó un súbito realineamiento político: los excontrincantes de Fujimori agrupados en el FREDEMO pasaron a respaldarlo, sin que les quedara ahora dudas sobre su patriotismo, mientras que las divididas izquierdas y el APRA, que lo habían apoyado, se sintieron traicionados y pasaron a la oposición.

Para llevar a cabo el ajuste económico fue indispensable la constitución y contribución del "Grupo de Apoyo" para limpiar las deudas atrasadas con los organismos internacionales, a raíz de la decisión de García de no pagar sino el equivalente al 10% de las exportaciones³. La decisiva participación de Japón y Estados Unidos en este grupo les otorgó una inusitada influencia, en especial a este último, al vincular su colaboración con el desenvolvimiento político.

Por último, Fujimori proclamó su adhesión a la Iglesia Católica y se deshizo del apoyo de los evangelistas de Cambio 90; esto no sólo neutralizó a la jerarquía, sino que fue el paso necesario para que lo apoyaran eclesiásticos conservadores, opuestos a la influyente Teología de la Liberación, así como militantes del Opus Dei, del Sodalitium Vitae, de los Templarios (Tradición, Familia y Propiedad).

Para aplacar la reacción social a las medidas económicas - que para muchos no eran sino una nueva muestra de las "traiciones" de los políticos, acallar la protesta

3 En 1990 los atrasos acumulados constituían el 20% del aumento de la deuda externa de América Latina; en Perú era 52% (Ffrench Davis y Devlin, 1993).

aprista y de las izquierdas radicales, Fujimori retrucó atacando a la "partidocracia" y a la democracia "formal". Haciéndose eco de la animosidad social contra la organización política y sus dirigentes, particularmente contra García sobre el que pendía la acusación de enriquecimiento ilícito, no cesó en sus diatribas; además, - apoyándose en gestos y comportamientos típicamente populistas - extendió su arremetida a los poderes Legislativo y Judicial, y en general, a la administración pública por ineficiente y corrupta, responsabilizándolos del estado calamitoso del país.

Al insistir Fujimori en esas críticas y decidir la aplicación de cirugía mayor para remover de raíz y sin contemplaciones las causas de los crónicos males del Perú, cosechó la siembra emprendida por de Soto, Vargas Llosa y, paradójicamente, García. Ante la inexistencia de actores y alternativas válidos, el contraataque de Fujimori a la debilitada oposición caló hondo, haciéndolo aparecer como el abanderado del orden, eficacia y honestidad, que se habían erigido como las principales necesidades sociales.

Al cabo de pocos meses de haber dictado las draconianas medidas de ajuste, la inflación comenzó a reducirse y, junto con el reconocimiento internacional, la popularidad de Fujimori subió, manteniéndose la adhesión a su gestión en alrededor del 60% de la población. La afirmación de su imagen de "salvador" se confirmó, y el "outsider", al cabo de poco tiempo, ganó un sorprendente grado de autonomía política.

Relativamente estabilizado en el poder, Fujimori se deshizo del gabinete constituido por simpatizantes de diferentes partidos, convocó a tecnócratas y empresarios para que continuaran aplicando las fórmulas diseñadas por los organismos multilaterales que monitorean paso a paso, día a día, el desenvolvimiento del conjunto de las actividades gubernamentales. Además, designó a familiares y adictos en puestos claves y secretos en diferentes esferas del aparato estatal que responden sólo a él, y a sus asesores de inteligencia, dando muestras reiteradas de su repudio a los procedimientos institucionales⁴. Así, el proyecto de restauración y modernización del Estado adoptó, paradójicamente, rasgos tradicionales de naturaleza neo-patrimonial, motivando que se comparara a Fujimori con el Presidente Leguía (1919-1930).

Frente a estas iniciativas, el fragmentado Congreso tuvo reacciones insólitas. La mayoría, constituida por los representantes de los partidos que habían formado

4 En la entrevista concedida a *New Perspectives Quarterly* (1993), Fujimori dice "This is not just a matter of institutions. Institutions are made out of people. If those people are rotten, the institutions are in danger of collapsing".

el FREDEMO y CAMBIO 90, respaldó la orientación económica por encontrarse en la "dirección correcta". Sin embargo, algunos de sus voceros no cesaron de criticar, conjuntamente con los representantes apristas e izquierdistas, la extrema dependencia del gobierno a los organismos multinacionales y la carencia de un equipo que, de manera autónoma, negociara los términos de la reinserción internacional y asumiera la reconstrucción económica. Asimismo, la mayoría del Congreso se dedicó a fiscalizar los actos del Ejecutivo, al no tomarla en cuenta.

Estos comportamientos acarrearón constantes tensiones entre los poderes; a fin de resolverlas, distintos legisladores reiteraron a Fujimori propuestas de negociar esas diferencias que le permitiría obtener el respaldo de una sólida mayoría parlamentaria. Pero Fujimori, en posición ofensiva las rechazó y acusó a los críticos de "mercantilistas" y pretender reinstaurar el "populismo", así como mellar la institución castrense para favorecer a la subversión. Mientras, no perdía ocasión para desacreditar por ineficaces y corruptas las instituciones que, supuestamente, le impedían ejecutar las transformaciones que perseguía realizar, como único medio para salvar al Perú.

El conflicto entre los poderes se complicó aún más, cuando en uso de las atribuciones concedidas por el Congreso, en noviembre de 1991 Fujimori promulgó una serie de dispositivos destinados a combatir la creciente ola de terrorismo y que le otorgaban a los militares poderes que atropellaban elementales derechos constitucionales. La posibilidad de una "gestapo" provocó una fuerte reacción en contra, que obligó al gobierno a retirar dichos dispositivos; para disimular su fracaso, aceptó que parlamentarios y militares acordaran una estrategia anti-subversiva, pero que en ningún momento se implementó, ni los militares pensaron hacerlo.

Para curarse en salud, el Congreso reglamentó el uso de los poderes extraordinarios otorgados al Presidente -que habían sido fuente de controversias en el gobierno de Belaunde y de García-, lo que para algunos voceros del oficialismo atentaba contra la Constitución. Mientras, la justicia bloqueaba el desarrollo de las reformas estructurales, que los voceros del gobierno atribuyeron a las influencias personales de García y también a las restricciones constitucionales (Boloña, 1993).

El permanente estado de tensión política estalló cuando la esposa del Presidente acusó de corrupción al hermano de éste, que cumple una clave y secreta posición en el gobierno. Ante el peligro de una investigación parlamentaria que descubriera los entretelones del gobierno, Fujimori decretó, con el apoyo militar, el golpe de estado

en abril de 1992 y lo justificó reiterando sus conocidas acusaciones contra la democracia "formal"⁵.

Una vez más, el contraataque de Fujimori tuvo éxito. La mayoría de los medios de comunicación y el 80% de la población encuestada respaldó su decisión; particularmente, empresarios y profesionales que habían hecho profesión de fe liberal, lo que mereció ácidas críticas de Vargas Llosa y la desintegración de la coalición que había formado. En tanto que García evadió la persecución y se asiló en Colombia, periodistas, políticos y dirigentes de organizaciones sociales fueron encarcelados y otros sufrieron prisión domiciliaria. Pero, los partidos y los gremios de los trabajadores se mostraron incapaces de hacer mayor cosa y pocos medios de comunicación se atrevieron a expresar su oposición a Fujimori.

Esta situación hizo innecesario mayor despliegue de fuerza militar y Fujimori apuró el paso para concentrar el poder: depuró profundamente la administración pública y colocó a un personal incondicional en los tribunales y en los comandos militares, de acuerdo a los criterios de sus asesores del servicio de inteligencia; a la par que sus tecnócratas decretaban una racha de reformas previamente acordadas con los organismos internacionales.

A fin de legitimar el golpe, Fujimori convocó a un "Diálogo Nacional", destinado a que el "pueblo" expusiera sus propuestas, que "notables" recogerían e incorporarían en una nueva Constitución que sería sometida a plebiscito; de esta manera, y sin el concurso de las intermediaciones políticas, se fundaría la "nueva democracia".

Sin embargo, la reacción internacional a la dictadura fue inmediata; particularmente del gobierno norteamericano que congeló sus aportes al Grupo de Apoyo, vetó la concesión de créditos de los organismos multinacionales al Perú y movilizó la opinión de los gobiernos americanos y de los países desarrollados contra Fujimori. El peligro de que el ejemplo de Fujimori fuera contagioso, en circunstancias que democracia y mercado son los nuevos puntales de la política internacional, contribuyó al relativo éxito de esta movilización. Además, distintas instituciones públicas y privadas internacionales presionaron para que el Perú asumiera a

5 Finalmente, tuvo que admitirse la seriedad de las advertencias del semanario OIGA sobre las intenciones de Fujimori que, luego, fueron confirmadas con la publicación de partes del plan operativo del servicio de inteligencia (OIGA 1993) y las acusaciones de altos oficiales del Ejército. Al respecto, ver el capítulo de Rospigliosi en este libro; sobre otras versiones de las causas del golpe, Centro Norte-Sur et. al. 1992.

cabalidad la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la defensa de los derechos humanos.

Así, la reinserción en la economía mundial, en condiciones de extrema vulnerabilidad, se acompañó con la interiorización de actores políticos y los nuevos principios internacionales, haciendo que Fujimori sintiera en carne propia los efectos de la globalización. Desde entonces, esta inédita participación de gobiernos e instituciones privadas extranjeras y su articulación con diversos actores nacionales, ha producido un escenario complejo de fundamental importancia para el curso de los acontecimientos (Cotler, 1994).

La internacionalización de la política nacional hizo que Fujimori tuviera que anular, a regañadientes, algunas de las más flagrantes disposiciones anti-democráticas y que se viera obligado a comprometerse en la reunión de Cancilleres de la OEA, especialmente convocada para ver los casos de Perú y Haití, a convocar elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, para lo que debía acordar con la oposición la fecha y las normas.

Fujimori incumplió sistemáticamente la última parte de su compromiso a fin de confundir a los políticos "tradicionales"; lo que contribuyó a que se evidenciara, una vez más, su duplicidad. La convocatoria electoral dividió las opiniones sobre la conveniencia de participar en ella; los que opinaban a favor esgrimían argumentos realistas, relativos a la necesidad de intervenir, a pesar de los riesgos que suponía, a fin de mantener viva la voz de la oposición; mientras, los que estaban en contra razonaban en términos éticos, aduciendo que no debía legitimarse el golpe de estado.

El resultado fue que los partidos importantes como APRA y AP, que tenían mucho que perder, decidieron inhibirse; mientras que el PPC y pequeñas organizaciones del espectro político, que tenían mucho que ganar, se incorporaron en la competencia electoral. Estas divisiones reforzaron el descrédito de los partidos, al observarse nuevamente su incapacidad para ponerse de acuerdo en temas trascendentales; lo que contribuyó a que ganara credibilidad la idea que dichas inhibiciones se debían a que las dirigencias partidarias no se atrevían a correr el riesgo de poner en evidencia su orfandad.

La lista oficial, seleccionados entre los adictos al presidente, tenía todas las de ganar gracias al endose personal de Fujimori, cuando se encontraba en el punto más alto de popularidad; al apoyo militar y de los empresarios, al de los medios de comunicación y, por último, al tácito respaldo de los organismos internacionales

públicos y privados de financiamiento. Así, Fujimori representaba un consenso insólito, del “pueblo” y de los “poderes fácticos”, mientras los “tradicionales” políticos se encontraban al margen.

Pero, el hecho decisivo para que la lista patrocinada por Fujimori ganara en noviembre de 1992 fue que, unos meses antes de las elecciones, el aparato de inteligencia dedicado al seguimiento de la cúpula subversiva, irónicamente organizado durante el gobierno de García, capturó al jefe de Sendero Luminoso y a las direcciones de los dos movimientos subversivos. La sensación de alivio que produjo este hecho promovió la imagen de Fujimori a niveles insospechados.

Por último, días antes de las elecciones, un abortado golpe militar supuestamente destinado a la recuperación democrática, aceleró la depuración de los mandos militares y se acentuó la persecución legal a algunos de los más belicosos dirigentes políticos contrarios al gobierno.

El envejecimiento del presidente se sumó a su duplicidad. Si en la reunión anual de empresarios éstos habían aplaudido cuando postuló, literalmente, a ocupar el cargo de emperador del país, tampoco tuvo empacho en declarar al sorprendido corresponsal de la revista brasileña *Veja* que “yo soy el poder” y que nunca como ahora el poder militar estaba sometido al civil.

Sin embargo, el triunfo gubernamental no fue aplastante como lo anticipaba el servicio de inteligencia: 43% del electorado votó las listas oficialistas, 33% eligió a candidatos partidistas y 24% de los votos fueron blancos o nulos. Este último bloque, superior a la tendencia histórica, en algunas importantes circunscripciones constituyó la mayoría del electorado, lo que contribuyó a poner en duda los resultados de las encuestas.

Para la elección municipal, que se realizó dos meses más tarde, enero de 1993, el gobierno modificó la legislación electoral para favorecer la proliferación de candidaturas y deslucir a los partidos, que en esta oportunidad sí decidieron participar. Pero el candidato oficial de Lima, donde radica más de la tercera parte del electorado, tuvo que retirarse antes de sufrir una derrota contundente; en tanto que las listas “independientes” obtuvieron el doble de votos de las elecciones municipales de 1989 al concentrar el 61% de las preferencias y los candidatos de los partidos se redujeron a 36% - cuando en 1989 habían obtenido el 71% -; pero igual, ganaron las alcaldías de varias ciudades importantes del país. A partir de entonces, el espacio municipal y el regional pasaron a constituirse en terreno de confrontación a Fujimori, motivo para que éste reaccionara furiosamente contra las autoridades ediles, calificándolas de “mazamorra negra” ...

Desde la instalación del Congreso Constituyente la manifiesta sumisión de la mayoría al Ejecutivo le permitió avanzar en la política de estabilización y en las

reformas estructurales; destacar personal confiable en todos los niveles del Poder Judicial y conceder a los militares las atribuciones para detener y juzgar de manera expeditiva, sin un debido proceso, a los que consideraran sospechosos de terrorismo. Los militares arreciaron su campaña "psico-social" y para evidenciar su eficacia, presentaron al público televisivo alrededor de mil acusados y condenados a severas penas; sin embargo, gracias a las presiones de organizaciones del país y del extranjero, muchos de ellos tuvieron que ser liberados al demostrarse su inocencia y cerca de 200 esperan la revisión de sus casos.

Además de esta concentración efectiva del poder, el proyecto constitucional elaborado por la mayoría del Congreso consignó amplias atribuciones al Ejecutivo y facultó la reelección presidencial, mientras limitaba las funciones del Legislativo y lo reducía a una sola cámara y a un pequeño número de representantes. De esta manera el proyecto constitucional configuraba, como la vasta gama opositora lo calificó, una dictadura legal que, con la continua adhesión popular, constituyen los rasgos básicos de la democradura.

La débil oposición aprovechó los resquicios legales para impugnar las arbitrariedades del gobierno y para cuestionar el proyecto constitucional hecho *-ad-hoc-* para Fujimori. Asimismo, la protesta a dicho proyecto de algunos medios de comunicación influyentes, colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos, regionales, religiosas, estudiantiles propició un debate nacional que ocupó el interés público durante meses. Esto ha favorecido para que, por fuera de los desacreditados partidos, estos actores confluyan en la defensa de las normas y procedimientos básicos de la democracia y ejerzan presión sobre dichas organizaciones para que se renueven.

Mientras los partidos políticos y los sindicatos seguían en su marasmo, la iniciativa de este debate partió de sujetos intelectuales y profesionales con posiciones políticas heterogéneas. Estos, más que impugnar el régimen *-in toto-*, criticaron temas específicos que impedían la restauración plena del Estado de Derecho: el recorte de los derechos económicos y sociales, la pena de muerte, el *-Habeas Data-*; la reducción de las prerrogativas edilicias y de las autoridades regionales. Asimismo, la concentración de atribuciones y la dependencia del Poder Judicial al Ejecutivo y la reelección presidencial.

A fines de octubre de 1993 el proyecto constitucional fue sometido a referéndum y sus resultados constituyeron un fiasco para el gobierno, para los militares y, personalmente, para Fujimori. Este había planteado que el voto a favor del proyecto constituiría la ratificación plebiscitaria a su gestión política que, de acuerdo a las encuestas del servicio de inteligencia, esperaba que fuera contundente. No era para menos, el capital político acumulado por Fujimori daba motivos para esperar que

así fuera. En efecto, Fujimori podía dar cuenta del sustantivo avance para la restauración del poder del Estado y del reestablecimiento del orden público por la reducción de la inflación, la captura de las cúpulas y la desarticulación de los movimientos subversivos, además de la oferta que el jefe de Sendero Luminoso le hiciera para poner fin a la guerra. Pero además de este capital, Fujimori contaba con el control sobre los recursos públicos que le permitió desarrollar una millonaria campaña publicitaria y el despliegue de gestos populistas, con el concurso de los militares.

Sin embargo, el proyecto fue aprobado - en el mejor de los casos - por un margen de 4%, cuando las expectativas oficiales eran de 40%; los votos favorables al gobierno, y particularmente a Fujimori, se concentraron en Lima y en el centro del país, mientras que el resto de las provincias, y cuanto más pobres, votaron en contra; así el referendun reproducía el carácter segmentado de los resultados de las elecciones de 1990. Además, el ausentismo fue alrededor del 35% y los votos blancos y nulos del 10%, lo que era totalmente insólito en la historia electoral del país. En suma, la constitución fue aprobada por la cuarta parte del electorado.

Por esto, la sorprendida oposición reclamó al gobierno un acuerdo para modificar los aspectos más controvertidos de la carta y establecer una relación "transparente" conducente a la plena recuperación democrática. Este reclamo se respaldaba en las encuestas de opinión: incluso la mayoría de los que votaron a favor de la aprobación del proyecto constitucional se manifestaba a favor de realizar dichas modificaciones y acuerdos.

Pero era pedir lo imposible. Fujimori y sus asesores corrigieron las tácticas populistas seguidas hasta entonces para asegurar el respaldo que legitimara la democracia y preparar el terreno para la reelección presidencial en 1995. Mientras esperaban que pasara la tormenta producida por los resultados del referéndum y promulgar el último día del año la constitución, los medios de comunicación se concentraron en noticias policiales y a seguir dando cuenta del inminente ingreso de multimillonarios préstamos e inversiones extranjeras.

El presidente retomó la iniciativa con una sistemática campaña de visitas a las regiones más pobres, distribuyendo recursos públicos que controla personalmente y promesas de masivas inversiones estatales, provenientes de los préstamos internacionales y de las privatizaciones. También, preparando el terreno para la reelección presidencial en 1995, dictó un dispositivo recortando los recursos municipales para concentrarlos en sus manos, que vino a ser el primero de una serie de atropellos a la constitución que días antes había promulgado pomposamente. Esto motivó que algunos alcaldes de ciudades importantes reaccionaran en contra y movilizaran la opinión pública.

Luego, la intervención de Fujimori -vía el Congreso- en la nominación de la Fiscalía despejó las dudas sobre la dependencia del Poder Judicial al Ejecutivo; por último, la denominada ley de la Cantuta, por la que se pretendió ocultar la conexión de los altos mandos con los asesinatos cometidos por comandos militares, hizo estallar la paciencia pública y originó protestas públicas y una dura reacción de las autoridades norteamericanas, que hacía poco habían estado en Lima para normalizar las tensas relaciones.

Siguiendo su estilo político de contraatacar ante situaciones críticas, Fujimori mandó a hacer un gran despliegue publicitario a la captura en Colombia, y la entrega al Perú, de uno de los jefes de las "firmas" del tráfico de cocaína. A fin de dar muestras de la eficacia de la expeditiva justicia militar fue enjuiciado por "traición a la patria", vistas sus conexiones con los movimientos subversivos. Pero, de esta manera, ocultaron las públicas conexiones militares con el narco-tráfico, para escándalo internacional.

En ambos casos, los voceros oficiales adujeron de manera explícita que era indispensable mantener intangible la autonomía y la alianza militar, de lo contrario sus mandos se apoderarían directamente del poder, tal como lo habían advertido. Estas decisiones han confirmado las sospechas sobre las intenciones militares y las del gobierno: garantizar la existencia de una democracia a largo plazo que Fujimori o, para el caso, cualquier otro "outsider" pueda representar con algún grado de legitimidad.

La indignada reacción de actores claves y medios de comunicación influyentes, incluso de algunos que han colaborado con el gobierno, marcó el brusco descenso de los índices de popularidad de Fujimori. Además, de muchos lados se han levantado voces que anticipan el carácter amañado de las próximas elecciones generales de 1995 que, para impedirlo y derrotar al fujimorismo, propician la integración de las diferentes posiciones en función del pleno establecimiento del régimen y las garantías democráticas.

Este sorprendente proceso en curso, que es motivo de algunos indicios de renovación de los partidos, puede tener consecuencias decisivas en un país tan marcado por históricas fragmentaciones de toda índole. Aprendiendo de otras experiencias, la unidad de las fuerzas que han venido a reconocer los valores democráticos podría ser la vía para eliminar los factores que dieron viabilidad y sustento a la democracia e iniciar el tránsito a la democracia; a la par que dar testimonio a otros, en trance de seguir similares experiencias a las peruanas, para enmendar rumbos.